

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA DE DECISIÓN LABORAL

El diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintidós (2022), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, procede a proferir sentencia de segunda instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por la señora **LUCELLY RESTREPO DE OQUENDO** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES** (en adelante COLPENSIONES), tramitado bajo el radicado único nacional 05001-31-05-018-2017-00026-01.

El magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y la Sala, previa deliberación sobre el asunto, adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos.

1. ANTECEDENTES:

A través de la presente demanda, la actora pretende el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, a partir del momento de cumplimiento de los requisitos, bajo las prerrogativas del Acuerdo 049 de 1990, como beneficiaria del régimen de transición, del Art. 36 de la Ley 100 de 1993, así como el pago de intereses moratorios o en subsidio la indexación, y las costas procesales.

Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, en lo que interesa resolver a esta instancia, expone la demandante que nació el 12 de marzo de 1959, por lo que arribó a la edad pensional de 55 años el mismo día y mes del año 2014, como beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 al contar para el 1° de abril de 1994 con 35 años de edad.

Indica que, en historia laboral expedida por Colpensiones en mayo de 2015, se aprecia que cuenta con una densidad de cotizaciones de 846 semanas, habiendo realizado la primera de ellas en agosto de 1986, sin embargo, revisada dicha historia laboral, se observa que los ciclos comprendidos entre febrero de 1995 y septiembre de 1999, el cual corresponde a 240,24 semanas, no fueron tenidos en cuenta por Colpensiones por presentar deuda del empleador.

Manifiesta que, contabilizando las semanas que le aparecen registradas en la historia laboral, con los periodos que inexplicablemente Colpensiones dejó de reconocerle por mora del empleador, completaría un total de 1163,38 semanas al 30 de abril de 2015, y para la entrada en vigencia del Acto Legislativo 001 de 2005 contaba con un total de 757,1 semanas, razón por la cual continuó siendo beneficiaria del régimen de transición hasta el 31 de diciembre de 2014.

Señala que, acorde con lo anterior, cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990 para acceder a la pensión de vejez desde el 12 de marzo de 2014, fecha en la cual cumplió los 55 años de edad y para la cual ya contaba con 1.005,1 semanas cotizadas, motivo por el cual procedió a solicitar el reconocimiento de la pensión de vejez ante Colpensiones, la cual le fue negada a través de la Resolución GNR 292064 del 03 de octubre de 2016, bajo el argumento que debía cumplir con los requisitos consagrados en la Ley 797 de 2003.

2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:

La *a quo* despachó de manera desfavorable las pretensiones de la demanda, absolviendo a COLPENSIONES de la totalidad de las pretensiones de la actora, luego de declarar probada la excepción de “falta de causa para demandar” formulada por Colpensiones.

Para el efecto, argumentó la juez de primera instancia que la demandante cuenta en toda su vida laboral con un total de 1047.44 semanas de cotización, hasta el 30 de septiembre de 2017, de las cuales 906 semanas fueron cotizadas al 31 de diciembre de 2014 fecha límite para la aplicación del régimen de transición, y que además de esas semanas, únicamente 516.86 fueron cotizadas al 25 de julio de 2005, fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 001 de 2005, motivo por el cual la actora no cumple con el requisito establecido en esta norma constitucional, para extender el beneficio transicional, más allá del 31 de julio de 2010.

Expuso que, si bien en la demanda se manifiesta que la historia laboral no refleja el número real de cotizaciones de la actora, como quiera que la entidad no está teniendo en cuenta los ciclos comprendidos entre el mes de febrero de 1995 y el mes de febrero de 1999, por presentar deuda del empleador, lo cierto de las tres historias laborales que obran en el plenario, la única que presenta deuda por el empleador entre febrero de 1995 y septiembre de 1999 es la aportada con la demanda, no así las que fueron allegadas por Colpensiones, concluyendo que dicha historia laboral no puede servir de base para el reconocimiento de la prestación pretendida, pues la misma tiene el carácter de informativa, mientras que las demás historias cuentan con las depuraciones y actualizaciones correspondientes, por ejemplo las obtenidas a través

del manejo de las deudas, real y presunta, de los empleadores que permiten depurar suficientemente la historia laboral, hasta el momento de determinar, si las deudas que se evidencian en la primer historia laboral, pueden ser reales y cobradas por la entidad de seguridad social y en esa medida, para la fecha en que de manera oficial se allegaron por parte de Colpensiones las ultimas historias laborales, el trámite administrativo previsto para la determinación de las deudas por parte de los empleadores ya había sido agotado, y por ende, el despacho tuvo en cuenta la última de las historias laborales, de la que se deduce, que no cumple la actora con la densidad de semanas exigidas por la norma para que en su caso aplique el régimen de transición.

Seguidamente manifestó la *a quo*, que, si bien la demandante para demostrar que en efecto laboró durante el periodo que alega como mora del empleador, citó a rendir testimonio a las señoras Beatriz Elena Cano Muñoz, y Gloria Elena Vargas, lo cierto es que de dicha declaración no se logra acreditar que la demandante hubiera laborado para la Pastelería Suiza entre 1995 y 1999.

3. DEL RECURSO DE APELACIÓN:

La apoderada judicial de la demandante, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, argumentando que no comparte la decisión del juez de instancia, reiterando como argumentos, que en el expediente existen dos historias laborales que fueron legamente expedidas por Colpensiones y que presentan una inconsistencia entre ambas, dado que en una aparece la deuda presunta desde febrero de 1995 hasta septiembre de 1999, y extrañamente en la historia posterior no aparecen dichos periodos, sin que obre prueba de que Colpensiones hubiese realizado actualización alguna, o depuración alguna o hubiese realizado un estudio específico del caso, para concluir que el periodo de febrero de 1995 a septiembre de 1999 debía desaparecer de la historia laboral.

Expone que, por lo tanto, no puede considerarse que si, a juicio de la entidad, sin sustento alguno, sin verificar con la demandante si efectivamente existieron o no esos tiempos, y lo que resulta más grave, sin determinar si fue la entidad accionada quien omitió realizar las acciones de cobro que por ley debía realizar, se decida entonces, unilateralmente, mutilar la historia laboral, máxime cuando sabía que existía un proceso judicial donde se estaban solicitando dichos periodos, motivo por el cual, que lo haga a mutuo propio y que sea el juzgado, el que diga que fue producto de depuración o actualización, sin que obre prueba de ello, cuestiona incluso la buena fe de la entidad, pues no puede existir esta, cuando existe un contraste de dos historias laborales y de la nada simplemente se elimina el periodo y no se explica por qué lo hace, pues no se pudo explicar, cómo los periodos de febrero de 1995 a septiembre

de 1999 no eran una deuda presunta del empleador, sino un error de la entidad, para suprimir tales periodos.

Argumenta que, si lo que pretendía Colpensiones, era sacar esos periodos que definían el futuro pensional de la demandante, debía explicar cómo se hizo ese proceso de depuración y por qué llegó a la conclusión que ese periodo no iba, mucho más cuando en este proceso se allegó prueba testimonial, en la cual las testigos señalaron que la demandante sí laboró para la pastelería suiza, incluso una de las deponentes indicó que era familiar del dueño de la pastelería, que se quemó en 1999.

Aduce que, si bien, infortunadamente dentro del proceso, ya no es posible traer a juicio a la pastelería Suiza porque dejó de existir como persona jurídica y no es posible que resista las pretensiones de esta demanda, ello no puede ser óbice para que la demandante, persona de especial protección constitucional por su edad, vea afectado su derecho pensional, simplemente por omisiones del empleador que no realiza cumplidamente las cotizaciones y de la entidad administradora de la pensión, que no realizó lo que por ley le correspondía cuando empezó a ver que el empleador estaba en mora, es decir, haber verificado cuál era la justificación, y si era posible las acciones de cobro y haber realizado las actualizaciones que requirieran en ese momento, pero no llegar a la hora de un proceso judicial y mutilar la historia laboral, pues ello no puede ser considerado como una actualización o depuración.

Finalmente señala que la prueba testimonial es clara y conducente, en el sentido de indicar que efectivamente si se dio la relación laboral, y por tanto está probado que la demandante con las semanas que deben reconocerse del año 1995 a septiembre de 1999, estaría cumpliendo con el requisito exigido por el Acto Legislativo 001 de 2005 por contar con más de 750 semanas requeridas y sería beneficiaria del régimen de transición por cumplir los 35 años antes del 1° de abril de 1994 y estar cotizando al sistema para ese momento, cumpliendo los 55 años en el 2014.

4. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, únicamente la apoderada judicial de COLPENSIONES, presentó oportunamente escrito de alegación, en los siguientes términos:

“Solicito a los señores Magistrados en esta instancia CONFIRMAR la sentencia proferida por la Juez 18 Laboral del Circuito de Medellín, por cuanto el demandante en su historia laboral que reposa en el expediente, se puede constatar que solo cuenta con 517 semanas cotizadas en toda su vida laboral por lo que no cumple con el

requisito de las 750 semanas cotizadas al 25 de julio de 2005, por lo que su régimen de transición feneció sin que hubiera acreditado el cumplimiento de los requisitos invocados en la demanda, por lo que no conserva el Régimen de Transición.

Con este panorama de presente no es posible acceder a la pretensión deprecada por el aquí demandante.

Con base en lo anteriormente expuesto solicito tener en cuenta lo mencionado, además de lo dicho en primera instancia, solicito muy respetuosamente que se mantenga incólume la sentencia de 1era instancia.”

5. PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER:

El problema jurídico a dilucidar se circunscribe a establecer, probó en este proceso cumplir con los requisitos legales para el reconocimiento y pago de pensión de vejez, en los términos del Decreto 758 de 1990, como beneficiaria del régimen de transición del Art. 36 de la ley 100 de 1993.

Tramitado el proceso en legal forma y no avizorándose hecho que conlleve a su nulidad, y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la apelación, conforme a lo dispuesto en el art. 10 de la Le 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes.

6. CONSIDERACIONES:

La Sala deberá ocuparse del estudio del recurso de apelación, con apego al imperativo contenido en el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad social, según el cual: *“La sentencia de segunda instancia, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación”*.

Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, es necesario manifestar que, en el presente caso se encuentra probado que la demandante nació el 12 de marzo de 1959 según se anota en el registro civil de nacimiento obrante a folio 9 del cartulario, lo que significa que para para el 1º de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia del sistema pensional de la Ley 100 de 1993 contaba con más de 35 años de edad.

También se acredita que, para la data de la entrada en vigencia del sistema pensional de la Ley 100 de 1993, la actora se encontraba afiliada al ISS hoy COLPENSIONES,

como se corrobora con el reporte de semanas cotizadas más actualizado obrante a folios 52 a 56 del expediente, en el que registra cotizaciones desde el 14 de agosto de 1986, por lo que, en principio la demandante es beneficiaria del régimen de transición de pensiones de vejez del extinto ISS hoy COLPENSIONES, conforme lo previsto en el artículo 36 de Ley 100 de 1993, es decir, contar con 35 años o más de edad, por lo que en principio tiene derecho a que se le defina el derecho que pueda tener a la pensión de vejez, con las normas del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de mismo año, el que otorga derecho a pensión de vejez al afiliado o afiliada, que tenga cotizadas 1000 semanas en cualquier tiempo o 500 en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, edad que en el caso de las mujeres es de 55 años, requisitos que, afirma la demandante, acreditó desde el desde el 12 de marzo de 2014, fecha en la cual cumplió los 55 años de edad y para la cual ya contaba con más de 1.000 semanas cotizadas.

A pesar de lo expresado en precedencia, impone recordar que el Acto Legislativo 01 de 2005, dispuso en su parágrafo transitorio 4to, que el régimen de transición del Art. 36 de la Ley 100 de 1993, terminaba el 31 de julio de 2010, dejando a salvo a quienes estando en dicho régimen, tuvieran a la fecha de su entrada en vigencia (29 de Julio de 2005 conforme la jurisprudencia de la Corte Constitucional), 750 o más semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios, a los que se les extiende el régimen de transición hasta el año 2014.

Frente a lo anterior, revisadas las historias laborales que obran en el plenario, observa la Sala que entre el 14 de agosto de 1986 y el 29 de julio de 2005, la actora cuenta con un total de **521 semanas** efectivamente cotizadas, mismas que resultan insuficientes para cumplir con el requisito establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005 y extender su beneficio transicional hasta el 31 de diciembre de 2014, lo que a su vez obligaría a que su derecho pensional sea analizado a la luz de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, norma que, a partir del 1 de enero de 2014 exige para el caso de las mujeres contar con 57 años, edad a la que arribó la demandante el 12 de marzo de 2016, requiriendo para dicha calenda un total de 1.300 semanas de cotización, las cuales no acredita, pues en la historia laboral más actualizada únicamente acredita un total de 1.047 semanas.

Sin embargo, afirma la demandante que en la historia laboral existen inconsistencias, pues COLPENSIONES dejó de tener en cuenta varios periodos laborados entre febrero de 1995 y septiembre de 1999, que en la historia laboral emitida el 13 de mayo de 2015, visible a folios 15 a 20, sí se encontraban registrados pero con nota de mora del empleador, y Colpensiones, dio de baja dichos ciclos en las historias laborales

posteriores, sin explicación alguna, y sin demostrar qué acciones desarrolló para demostrar si dicha deuda era real o presunta, o las acciones de cobro que desplegó ante su empleador para obtener el pago de dichos ciclos de cotización, indicando además que respecto a la existencia de la relación laboral en el citado interregno de tiempo, quedó debidamente acreditada con los testimonios traídos al proceso, concluyendo entonces que no podía Colpensiones unilateralmente, mutilar la historia laboral, sin demostrar haber realizado actualización o depuración o un estudio específico del caso para concluir que el periodo de febrero de 1995 a septiembre de 1999 debía desaparecer de la historia laboral, máxime cuando sabía que existía un proceso judicial donde se estaban solicitando dichos periodos.

Para resolver la inconformidad de la parte actora, debe señalarse que conforme lo previsto en el artículo 167 del CGP, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, lo que significa que, por regla general, corresponde a cada parte invocar claramente los hechos en que finca sus pretensiones y además probarlos mediante prueba idónea.

En ilación con lo anterior, la Sala hará un estudio minucioso de las historias laborales de la demandante, y demás pruebas documentales y testimoniales obrantes en el plenario, con el fin de determinar si en efecto existen inconsistencias que puedan ser tenidas en cuenta, a efecto de determinar el posible derecho a la pensión de vejez que le asista a la actora.

En la historia laboral aportada por la demandante, que milita a folios 15 a 20, la cual considera la recurrente, debe ser tenida en cuenta de manera preferente para determinar su derecho pensional, se observa que se registran cotizaciones de manera ininterrumpida con el empleador PASTELERÍA SUIZA entre el 14 de agosto de 1986 y el ciclo de diciembre de 1994 inclusive, y además un pago del ciclo de enero de 1995 de 16 días. A partir de febrero de 1995 no aparece pago de cotizaciones, ni se contabilizan semanas anotándose la observación *“Su empleador presenta deuda por no pago”*,

El apoderado de la actora afirma en la apelación, que en el trámite del proceso probó que prestó sus servicios para dicho empleador en los extremos en los que se presenta la mora del empleador en las cotizaciones, y era responsabilidad de Colpensiones efectuar sus labores de cobro de las cotizaciones, sin que dicha situación deba afectar el derecho pensional de la actora.

En este punto, coincide la Sala con lo señalado por la recurrente, cuando indica que

la falta de pago oportuno por parte del empleador o la omisión en el ejercicio de la acción de cobro por parte de las administradoras de fondos de pensiones no debe perjudicar al trabajador, dado que la jurisprudencia de la SCL del CSJ, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, han precisado que las AFP deben tener en cuenta los aportes pensionales que se encuentren en mora en el pago de los empleadores del trabajador dependiente, pues al haber omitido la acción de cobro de las cotizaciones las AFP deben asumirlas sin que se le pueda trasladar al trabajador las consecuencias de su inacción en el cobro de las cotizaciones.

A pesar de lo anterior, para que se pueda predicar la aludida mora, es menester que el trabajador que la alega, pruebe que efectivamente trabajó con el empleador del que invoca la mora o que ello se pueda deducir de la prueba obrante en el plenario, pues bien puede suceder y como en muchos casos se ha constatado que una vez termina la relación laboral del trabajador con su empleador, este cesa en el pago de las cotizaciones, pero no reporta la novedad de retiro a la AFP, por lo que está asume que hay una deuda y así lo anota en la historia laboral, pero tal anotación no puede interpretarse sin prueba adicional como mora del empleador.

Es así, que analizada la prueba documental obrante en el expediente, encuentra la Sala que, además de la historia laboral aportada por la parte demandante, no obra al interior del plenario ningún otro documento del cual pueda desprenderse que efectivamente la demandante laboró de manera ininterrumpida para la PASTERÍA SUIZA entre febrero de 1995 y hasta septiembre de 1999, advirtiéndose que si bien a partir del 16 de enero de 1995 no se reportan cotizaciones con dicho empleador y que este nunca reportó la novedad de retiro de la demandante, tampoco puede tenerse como laborado con dicho empleador periodos posteriores al 16 de enero de 1995 y hasta septiembre de 1999, pues como ya se anotó, no acreditó la demandante por ningún medio haber laborado en dichos periodos para dicho empleador y por tal razón no puede asumir la judicatura que efectivamente existió dicha relación laboral durante dicho periodo.

Ahora, en cuanto a lo señalado en el recurso de apelación, referente a que la prueba testimonial es clara y conducente, en el sentido de acreditar que efectivamente sí se dio la relación laboral, escuchadas las declaraciones de las señoras BEATRIZ ELENA CANO MUÑOZ y GLORIA ELENA VARGAS RESTREPO, las cuales se encuentran grabadas a partir del minuto 00:08:10 del CD de folio 57 que contiene el audio de la audiencia de conciliación, de sus dichos, si bien puede concluirse que efectivamente la demandante laboró para dicha PASTERÍA, lo cual no se encuentra en discusión en el proceso, no se encuentra que las testigos hayan declarado la

existencia de la continuidad de la relación laboral entre febrero de 1995 y septiembre de 1999, pues por ejemplo la señora BEATRIZ ELENA CANO MUÑOZ, aunque recuerda que fue compañera de la demandante en la PASTELERÍA SUIZA y que laboró allí hasta el año 1994 y que luego de su retiro la demandante continuó laborando allí, incluso hasta tiempo después del incendio de dicho establecimiento de comercio, no recuerda hasta qué fecha laboró allí la demandante, ni recuerda tampoco la fecha del incendio de la pastelería.

Por su parte, la testigo GLORIA ELENA VARGAS RESTREPO, aunque manifestó que fue compañera de la demandante en la PASTELERÍA SUIZA durante tres años entre 1991 y 1994, y que luego de su retiro, la demandante continuó laborando allí, y que lo sabe porque luego se colocó en otro negocio que también quedaba ubicado en el Parque Bolívar de Medellín y veía pasar a la actora por el frente de su trabajo y que además alrededor de cada mes se reunía con la demandante y con otras amigas para compartir, ya fuera en su casa o en la casa de la actora, lo cierto es que su declaración tampoco ofrece certeza sobre los extremos temporales de la relación laboral, a fin de verificar si los mismos coinciden con los periodos de los que se reclama la mora en el pago del empleador, encontrándose contradicción con la testigo anterior, al afirmar que el incendio de la pastelería ocurrió en el año 1999 y que después de allí dicho negocio se acabó, por lo que a partir de ese año la actora dejó de laborar allí, mientras que la testigo CANO MUÑOZ afirmó que luego del incendio la pastelería continuó funcionando y que la demandante continuó laborando allí, no siendo posible para la Sala dilucidar cuál de las versiones es la cierta, debiéndose desestimar tal argumento de la apelación.

Es relevante para la Sala, que el empleador PASTELERIA SUIZA, realizó cumplidamente el pago de las cotizaciones hasta el ciclo de diciembre de 1994 pagando 30 días, y en el de enero de 1995 paga solo 16 días, lo que es un indicio que la demandante solo habría trabajado hasta el 16 de enero de 1995, sin que se haya reportado a novedad de retiro, pues las reglas de la experiencia nos enseña, que un empleador que ha sido fiel al pago de sus aportes pensionales de sus trabajadores, no va a cesar en el pago sin razón alguna.

De otra parte, en la praxis judicial se ha encontrado que en algunas historias laborales de los afiliados cuando no se reporta la novedad de retiro de parte de algunos empleadores entre los años 1995 a 1999, dichas anualidades se reflejan en ceros con la observación *“Su empleador presenta deuda por no pago”* y sin que se consigne IBC reportado ni cotización pagada. Y en virtud de ello, en la práctica, se demanda el reconocimiento de tales periodos aduciendo la mora del empleador. Circunstancia que

se ha visto subsanada con la expedición posterior del reporte de semanas de los asegurados actualizado. Por lo que la jurisprudencia ha precisado que al operador judicial le corresponde en esos casos comprobar que en ese lapso existió un contrato de trabajo o, en otros términos, que el empleador moroso estaba obligado a efectuar dichas cotizaciones porque el trabajador prestó servicios durante el mismo, a efectos de declarar la existencia de periodos no contabilizados, prueba que, en este caso, no encuentra la Sala.

Respecto de la afirmación del apoderado del demandante que en la historia laboral existen inconsistencias, pues COLPENSIONES dejó de tener en cuenta varios periodos laborados entre febrero de 1995 y septiembre de 1999, que en la historia laboral emitida el 13 de mayo de 2015, visible a folios 15 a 20, sí se encontraban registrados pero con nota de mora del empleador, la Sala considera que el alegado registro de las cotizaciones con nota de reconocimiento de mora por Colpensiones, es errado, pues lo que COLPENSIONES anota es que: *“su empleador presenta deuda por no pago”* pero una deuda por no pago, bien puede ser por culminación de la relación laboral de la acora, no que necesariamente por falta de pago en presencia de la relación laboral.

Y es que COLPENSIONES si bien en la nueva historia laboral glosada a folios 52 a 54, no registra el periodo entre el febrero de 1995 y septiembre de 1999, que en la historia laboral anterior se anotaba con la inscripción *“su empleador presenta deuda por no pago”* sí agrega como cotizadas por la demandante semanas entre enero de 2004 y junio de 2005 con el empleador ABELARDO DE JESÚS DUQUE DUQUE pagadas mediante cálculo actuarial todas el 30 de abril de 2016, lo que denota que COLPENSIONES no solo tenía interés en actualizar la historia laboral, en contra de la demandante, sino también en lo que le favoreciera.

Conforme lo que viene de decirse, se concluye que no es posible en esta instancia tener como tiempo válido y computable de semanas cotizadas por la demandante el periodo entre febrero de 1995 y septiembre de 1999, y en ese orden de ideas, como ya se anotó, la demandante no reúne el número mínimo de semanas que exige el Acto Legislativo 01 de 2005 para extender su beneficio transicional hasta el 31 de diciembre de 2014, ni tampoco acredita el requisito de semanas exigido por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, para acceder a la pensión de vejez, motivo por el cual se confirmará la decisión absolutoria de primera instancia conocida en apelación.

Costas en esta instancia a cargo de la demandante y a favor de COLPENSIONES, por haber sido vencido en el recurso de apelación. Las agencias en derecho, conforme al Nral. 3 del Artículo 366 del CGP, las estima el ponente en la suma de \$1.000.000

7. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 17 de septiembre de 2019 proferida por el JUZGADO DIECIOCHO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el presente proceso ordinario laboral de primera instancia, promovido por la señora **LUCELLY RESTREPO DE OQUENDO** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES**.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo De la demandante y a favor de COLPENSIONES. Las agencias en derecho las fija el ponente en la suma de \$1.000.000.

La anterior sentencia se notifica a las partes en EDICTO.

Oportunamente devuélvase el expediente al juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, por quienes intervinieron en la decisión, los Magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado

Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **81d98cfd271d702793116dd7f968e36f3e59eafb51c7c04f5e7b66d05d60de70**

Documento generado en 19/12/2022 02:36:31 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>